



Roj: **STSJ PV 3569/2017 - ECLI: ES:TSJPV:2017:3569**

Id Cendoj: **48020340012017102080**

Órgano: **Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social**

Sede: **Bilbao**

Sección: **1**

Fecha: **07/11/2017**

Nº de Recurso: **1926/2017**

Nº de Resolución: **2166/2017**

Procedimiento: **Recurso de suplicación**

Ponente: **MODESTO IRURETAGOYENA ITURRI**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

**RECURSO N°:** Suplicación 1926/2017

**NIG PV 48.04.4-17/003326**

**NIG CGPJ 48020.44.4-2017/0003326**

**SENTENCIA N°: 2166/2017**

**SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**

**DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO**

En la Villa de Bilbao, a 7 de noviembre de 2017.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, formada por los/as Ilmos/as. Sres/as. D. MODESTO IRURETAGOYENA ITURRI, Presidente en funciones, Dª ANA ISABEL MOLINA CASTIELLA y D. JUAN CARLOS BENITO BUTRON OCHOA, Magistrados/as, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

### **S E N T E N C I A**

En el Recurso de Suplicación interpuesto por Amelia y GOBIERNO VASCO DEPARTAMENTO DE GOBIERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO contra la sentencia del Juzgado de lo Social num. Diez de los de BILBAO (BIZKAIA) de fecha 15 de mayo de 2017, dictada en proceso sobre RPC, y entablado por Amelia frente a **GOBIERNO VASCO DEPARTAMENTO DE GOBIERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO**.

Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. MODESTO IRURETAGOYENA ITURRI, quien expresa el criterio de la Sala.

### **ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO** .- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:

"1º.- La demandante DÑA. Amelia, vino prestando servicios para el GOBIERNO VASCO, en concreto para el Instituto Vasco de Estadística, en virtud de diversos contratos como personal laboral.

2º.- La demandante suscribió los siguientes contratos:

A.- Contrato de trabajo para obra o servicio determinado de fecha 5/10/2015 consistente en la realización de la elaboración de la Estadística de Servicios Públicos Electrónicos \_ESPE- 2015, con un salario bruto anual de 21.963,23 euros. En el contrato se establece a la extinción el derecho de la trabajadora a percibir una indemnización de 8 días de salario por año de servicio.

El contrato se extinguió por comunicación de la demandada en virtud de la finalización de la obra o servicios en fecha 31/05/2016.



La actora percibió en concepto de indemnización 479,40 euros.

B.- Contrato de trabajo de interinidad de fecha 21/06/2016, y ello para la sustitución de la trabajadora en excedencia Dña Hortensia , estableciéndose una remuneración anual de 22.155,70 euros.

El contrato se extinguió el 7/10/2016, por reincorporación de la titular.

C.- Contrato de trabajo de interinidad de fecha 26/10/2016, y ello para la sustitución del trabajador en excedencia D. Héctor , estableciéndose una remuneración anual de 22.155,70 euros.

El contrato se extinguió el 30/12/2016, por reincorporación del titular.

3º.- Por la demandante se interesó al Gobierno Vasco reclamación administrativa la cual consta en las actuaciones y se da por reproducida."

**SEGUNDO** .- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice:

"Que estimando la petición subsidiaria de la demanda formulada por DÑA. Amelia frente a GOBIERNO VASCO, debo condenar y condeno a la demandada al pago a la actora la suma indemnizatoria de 366,18 euros."

**TERCERO** .- Frente a dicha resolución se interpuso el Recurso de Suplicación, que fue impugnado por las partes contrarias.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO**.- Presentada demanda por D<sup>a</sup> Amelia frente al Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzta en reclamación, con alusión de la doctrina sentada por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en sentencia de 14.9.2016, de indemnizaciones derivadas de la finalización de los contratos de trabajo que les vincularon (un contrato para obra o servicio determinado y dos contratos de interinidad) sobre 20 días de salario por año trabajado, de tal forma que el Juzgado se las reconoce pero calculadas sobre 12 días de salario por año de servicio en aplicación del art. 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores (366,18 euros), por las representaciones letradas de las dos partes contendientes de interponen sendos recursos de suplicación dirigidos al examen del derecho aplicado, el de la demandante -que es impugnado por la parte contraria- para el reconocimiento de un total de 897,61 euros, y el de la Administración demandada para la total desestimación de la demanda interpuesta.

**SEGUNDO**.- Los dos recursos se componen de un motivo único que, al amparo del art. 193 de la LRJS , persiguen los pronunciamientos antedichos denunciando la parte actora la infracción de los arts. 3.1 y 5, 4 , 15.5 y 6 , 49.1 c ) , 51 , 52 y 53.1 b), así como las disposiciones adicionales 15<sup>a</sup> y 16<sup>a</sup> y la disposición transitoria 8<sup>a</sup> del Estatuto de los Trabajadores , el art. 9.3 de la Constitución y la jurisprudencia en relación a la doctrina del TJUE sobre la protección de los trabajadores temporales ante la indemnización por extinción de su contrato de trabajo al amparo del Acuerdo Marco que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CEE; la parte demandada denuncia la infracción de lo dispuesto en el art. 15.1 c), en relación con el art. 49.1 c) del Estatuto de los Trabajadores , todo ello en relación con la interpretación que esta Sala ha hecho de la STJUE de 14 de septiembre de 2016, Asunto C- 596/2014.

Con carácter previo diremos que, de acuerdo con el criterio de la Sala adoptado en Pleno no jurisdiccional celebrado al efecto (y reflejado en Auto de 13 de junio de 2017 -recurso de queja 909/2017-), la sentencia tiene acceso al recurso de suplicación aun tratándose de una reclamación inferior a 3000 euros, al considerar la Sala la existencia de afectación general interpretada conforme a SSTC 79/1985 de 3 de julio , y 162/1992 de 26 de octubre , y de manera especial de acuerdo con la doctrina contenida en SSTS de 3 de octubre de 2003 (rcud 1011/2003 y 1422/2003 ) , de Sala General, al ser innumerables las demandas que se están presentando por quienes han mantenido contratos temporales extinguidos a su término, en las que reclaman el pago de la indemnización de 20 días de salario por año de servicio o diferencias entre ésta y la percibida en menor cuantía, resolviendo la Sala numerosos recursos en los que se ha planteado la misma cuestión.

Esta cuestión ha sido ya resuelta por esta Sala en varias Sentencias, siguiendo criterio de Pleno no jurisdiccional, de entre las que cabe invocar la Sentencia 18 de octubre de 2016 ¿ Rec. 1690/16 ¿ y muchas que la han seguido posteriormente, en las que, en esencia, se ha razonado como sigue (como resumidamente expresa sentencia de 24.10.2017, rec. 1938/17 ): "a) en relación a la aplicabilidad de la STJUE de 14.9.2016, caso Ana de **Diego Porras** vs España, se recuerda la primacía de la jurisprudencia comunitaria al resolver cuestiones prejudiciales, según el artículo 234 del Tratado CE , así como la prevalencia del Derecho de la Unión Europea frente al Derecho interno y la obligación de la Sala de lo Social, como juez nacional, de aplicar ese Derecho; b) a la hora de resolver el caso concreto, se razona que la STJUE en cuestión no crea un nuevo derecho a una indemnización, sino que lo que hace es recordar cuál es la interpretación auténtica de la Directiva



1999/70/ CE; c) se recuerda también la eficacia vertical del Acuerdo Marco y su aplicación directa a este pleito, ya que nos hallamos en una relación laboral en Administración Pública, por lo que se entiende plenamente aplicable la doctrina de la STJUE de 14.9.2016, y no solo a la extinción de los contratos de interinidad, sino también a los supuestos de extinción de contrato para obra o servicio determinado."

Como indicamos en la sentencia de 10.10.2017 (rec. 1752/17), "la Sala por mayoría va a desestimar el recurso, de conformidad con la línea decisoria que venimos sosteniendo desde la sentencia de 18 de octubre de 2016 (rec.1690/2016 ), a su vez amparada en STJUE de 14 de septiembre de 2016 (asunto C-596/14 , De **Diego Porras**), dictada en aplicación de la Directiva 1999/70/CE de 28 de junio de 1999 -en concreto de la cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada que figura en el anexo de la Directiva 1999/70-, y que hemos seguido en pronunciamientos ulteriores (entre otros varios, las sentencias de 18 de octubre y 22 de noviembre de 2016 , 20 de junio y 19 de septiembre de 2017 , rec.1872/2016 , 1691/2016 , 2146/2016 .1221/2017 y 1515/2017 ). Desde nuestra sentencia de 18 de octubre de 2016 conforme a la interpretación que venimos sosteniendo de la STJUE de 14 de septiembre de 2016 (asunto C-596/14 ), a los trabajadores con contrato temporal les corresponde la indemnización prevista para un trabajador indefinido cuando el final de la relación laboral viene determinado por condiciones objetivas, esto es, 20 días por año, criterio que sustentamos en la igualdad de trato tal y como afirmábamos en la de 22 de noviembre de 2016 -rec.2146/2016- (en aquel caso la indemnización por fin del contrato se postulaba por un trabajador con contrato eventual por circunstancias de la producción), dado que no apreciamos que concurra una causa que justifique el trato desigual en el concreto aspecto que analizamos entre un trabajador con contrato indefinido frente a otro con contratación temporal."

La sentencia de 29.9.2017 (rec 1705/17), por su parte, ha señalado: "Siguiendo criterios previos (por todas TSJPV 22-11-2016, recurso 2146/2016), diremos que básicamente la doctrina del TJUE, sentencia de 14-9-2016, asunto C-596/2014, ha establecido que a los contratados temporales que vengán realizando iguales actividades que los trabajadores fijos, se les debe tratar con el mismo criterio, de forma que a la hora de extinguir su contrato de trabajo no sea admisible una indemnización inferior a aquella que hubiese percibido un trabajador estable/fijo/indefinido de la empresa. Una primera anotación, y es que consideramos directamente aplicable al supuesto que ahora examinamos esta doctrina pues las sentencias comunitarias son directamente aplicables vinculando de forma efectiva. Pero, aunque no lo fuesen, su interpretación a lo que nos está remitiendo es al derecho comunitario, y éste es de interpretación y aplicación directa por los órganos jurisdiccionales (TJCE 16-7-09, C-537/07 y 24-6-10, C-98/09 ). El denominado efecto horizontal de la normativa comunitaria es predicable del asunto que examinamos, por lo que procedemos a ello en el supuesto del trabajador demandante. Los requisitos para que se pueda aplicar la indemnización que postula la norma comunitaria, según inferimos de la sentencia dictada, son los siguientes: Primero, el presupuesto fáctico/empírico: a) que consiste en fijar una contratación temporal asimilable a una prestación de servicios del trabajador fijo; y, b) que concurra una situación de igualdad o equiparación entre el trabajador temporal y otro de carácter fijo; y, Segundo, el presupuesto secuencial/fondo, que consiste en la aplicación del efecto derivado del principio de igualdad: tratamiento similar entre los desigualmente contemplados sin causa suficiente para ello. En cuanto al presupuesto fáctico, situación de contratación temporal, es apreciable que los demandantes están en esta situación; y, también concurre este presupuesto material o experiencial, pues no consta ningún tipo de peculiaridad en la actividad como pudiera ser un elemento de parcialidad, por complemento de su formación o capacidad; y, por último, el elemento dinámico o secuencial, que consiste en la conclusión efectiva: no se ha percibido una indemnización al finalizar el contrato, por lo que la que conforme a la nueva interpretación la que corresponde es esta de 20 días/año. Concurren, como vemos, todos los requisitos de aplicación de la normativa comunitaria. Pero, además, de ello la reflexión jurídica que debemos realizar es que el planteamiento idóneo de esta cuestión es que hubiese sido la aplicación de nuestro ordenamiento el que nos hubiese conducido a la misma conclusión, y la causa de ello proviene de la virtualidad del art. 14 CE y, traslativamente, del 17 ET en relación al 15 del mismo texto. Hubiéramos ya nosotros, con carácter originario, haber establecido y reflexionado que la igualdad supone el derecho a un tratamiento similar para quien se encuentra en igual situación que otro; la discriminación, a diferencia de la igualdad, lleva consigo la apreciación de una causa de diferencia entre iguales que es odiosa para el legislador (como la raza, el sexo), y esta, la discriminación, en nuestro supuesto no es apreciable. Pero, sí la desigualdad, porque esta lo que establece es que quien está en la misma situación, sin causa objetiva y definida desde el parámetro de la razón, sin embargo, es tratado de forma diversa ( TS 25-3-2015, recurso 295/14 y 15-3-16 recurso 96/15 ). A la hora de aplicar este criterio de igualdad no se considera que concurra una causa de desigualdad por la existencia de una contratación indefinida frente a otra temporal, y deben ser tratados igual los trabajadores temporales que los fijos. Con lo dicho se aprecia que no existe una posible diferenciación del trabajador interino, caso de los demandantes, con el resto de operarios que realizan una actividad indefinida o fija."



Pues bien, sobre las anteriores directrices fijadas en esta Sala por mor de la doctrina comunitaria, debemos desestimar el recurso del Gobierno Vasco y estimar el de la demandante, con reconocimiento, a cargo de la administración empleadora, de la indemnización de 20 días por año de servicio a la extinción de sus contratos temporales de trabajo, que asciende a la cantidad total de 897,61 euros.

**TERCERO.-** Aunque la recurrente está exenta de la obligación de constituir el depósito y las consignaciones para poder recurrir en suplicación ( art. 229.4 de la LRJS ), procede imponer a la misma, como pronunciamiento accesorio, las costas del recurso ( art. 235.1 LRJS ).

## FALLAMOS

Que **desestimando** el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada del Gobierno Vasco, y **estimando** el interpuesto por la representación letrada de D<sup>a</sup> Amelia , ambos frente a la sentencia del Juzgado de lo Social nº 10 de Bilbao, dictada el 15 de mayo de 2017 en los autos nº 333/2017 sobre cantidad, seguidos a instancia de D<sup>a</sup> Amelia contra el Gobierno Vasco-Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, **revocamos** la sentencia recurrida y, con estimación de la demanda, condenamos a la administración demandada al abono a la demandante de la cantidad de 897,61 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, informándoles de que no es firme, pudiendo interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina en los términos y con los requisitos que se detallan en las advertencias legales que se adjuntan.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/

**PUBLICACIÓN.-** Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Il<sup>mo</sup>/a. Sr/ a. Magistrado/a Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

## ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por **Letrado** dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los **10 días hábiles** siguientes al de su notificación.

Además, **si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar** , al *preparar* el recurso, el justificante de haber ingresado en esta Sala el importe de la condena; o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social, una vez se determine por ésta su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de esta Sala de lo Social al tiempo de *preparar* el recurso, la consignación de un depósito de 600 euros.

Los **ingresos** a que se refieren los párrafos anteriores se deberán efectuar, o bien en entidad bancaria del Banco Santander, o bien mediante transferencia o por procedimientos telemáticos de la forma siguiente:

A) Si se efectúan en una oficina del Banco Santander, se hará en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de dicho grupo número 4699-0000-66-1926-17.

B) Si se efectúan a través de transferencia o por procedimientos telemáticos, se hará en la cuenta número ES55 0049 3569 9200 0500 1274, haciendo constar en el campo reservado al beneficiario el nombre de esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y en el campo reservado al concepto el número de cuenta 4699-0000- 66-1926-17.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del regimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.